



Asamblea General

Distr. general
7 de septiembre de 2021
Español
Original: inglés

Septuagésimo quinto período de sesiones

Tema 72 b) del programa

**Promoción y protección de los derechos humanos:
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros
medios de mejorar el goce efectivo de los derechos
humanos y las libertades fundamentales**

Nota verbal de fecha 3 de septiembre de 2021 dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ante las Naciones Unidas tiene el honor de transmitir adjunta una nota verbal dirigida al Secretario General por 27 Estados Miembros (véase el anexo) mediante la cual desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, y señalan los motivos de su persistencia en esa objeción, después de que el 16 de diciembre de 2020 la Asamblea General aprobara, en votación registrada, su resolución [75/183](#), titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”.

Los 27 Estados Miembros que se enumeran en la nota verbal adjunta desean señalar a la atención del Secretario General el párrafo 1 de la resolución [75/183](#) de la Asamblea General, en el que la Asamblea reafirmó el derecho soberano de todos los países a establecer su propio ordenamiento jurídico y, en particular, a determinar las sanciones jurídicas que fueran apropiadas, con arreglo a las obligaciones que les correspondían en virtud del derecho internacional, y tienen a bien solicitar al Secretario General que refleje los motivos que se exponen en la nota verbal adjunta, en particular la reafirmación del derecho soberano de todos los países a establecer su propio ordenamiento jurídico que figura en la resolución [75/183](#), en el informe que el Secretario General habrá de presentar a la Asamblea en su septuagésimo séptimo período de sesiones sobre la aplicación de la resolución [75/183](#), y que haga distribuir la presente nota verbal y su anexo como documento de la Asamblea, en relación con el tema 72 b) del programa.



Anexo de la nota verbal de fecha 3 de septiembre de 2021 dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

3 de septiembre de 2021

Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York incluidas en la lista que figura al final del presente documento tienen el honor de referirse a la resolución [69/186](#) de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, que fue aprobada en votación registrada por la Tercera Comisión el 21 de noviembre de 2014 y posteriormente por la Asamblea el 18 de diciembre de 2014. Dichas Misiones Permanentes desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, por los motivos siguientes:

a) No hay consenso internacional sobre la necesidad de abolir la pena de muerte. Así queda confirmado en las votaciones de las resoluciones sobre este tema en anteriores períodos de sesiones de la Asamblea General, y la cuestión sigue siendo controvertida. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece, entre otras cosas, que “en los países que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito”;

b) Esta opinión ya se había manifestado anteriormente en:

i) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/73/1004](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [73/175](#) de la Asamblea General;

ii) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/71/1047](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [71/187](#) de la Asamblea General;

iii) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/69/993](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [69/186](#) de la Asamblea General;

iv) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/67/841](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [67/176](#) de la Asamblea General;

v) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/65/779](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho

internacional, tras la aprobación de la resolución [65/206](#) de la Asamblea General;

vi) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/63/716](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [63/168](#) de la Asamblea General;

vii) La nota verbal que figura como anexo del documento [A/62/658](#), en la que las delegaciones firmantes indicaron que mantenían su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria de la aplicación de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes del derecho internacional, tras la aprobación de la resolución [62/149](#) de la Asamblea General;

viii) La declaración conjunta que figura en el documento [E/CN.4/2005/G/40](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos;

ix) La declaración conjunta que figura en el documento [E/CN.4/2004/G/54](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2004/67 de la Comisión de Derechos Humanos;

x) La declaración conjunta que figura en el documento [E/CN.4/2003/G/84](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos;

xi) La declaración conjunta que figura en el documento [E/CN.4/2002/198](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2002/77 de la Comisión de Derechos Humanos;

xii) La declaración conjunta que figura en los documentos [E/CN.4/2001/161](#) y [E/CN.4/2001/161/Corr.1](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2001/68 de la Comisión de Derechos Humanos;

xiii) La declaración conjunta que figura en el documento [E/CN.4/2000/162](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 2000/65 de la Comisión de Derechos Humanos;

xiv) La declaración conjunta que figura en el documento [E/1999/113](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1999/61 de la Comisión de Derechos Humanos;

xv) La declaración conjunta que figura en los documentos [E/1998/95](#) y [E/1998/95/Add.1](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos;

xvi) La carta conjunta que figura en los documentos [E/CN.4/1998/156](#) y [E/CN.4/1998/156/Add.1](#), en la que las delegaciones firmantes expresaron sus reservas antes de la aprobación de la resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos;

xvii) La declaración conjunta que figura en el documento [E/1997/106](#), en la que las delegaciones firmantes se desvincularon de la resolución 1997/12 de la Comisión de Derechos Humanos;

c) En la declaración que formuló en el plenario de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, celebrada en Roma el 17 de julio de 1998, el Presidente

de la Conferencia afirmó que el debate mantenido en ese foro sobre la cuestión de las penas que debía aplicar la Corte había puesto de manifiesto la falta de consenso internacional sobre la inclusión o no de la pena de muerte, así como que su no inclusión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no tendría efecto jurídico de ningún tipo en la legislación y las prácticas nacionales referentes a la pena capital, ni debía entenderse que influiría en el desarrollo de una norma consuetudinaria de derecho internacional o de cualquier otro modo en la legalidad de las penas previstas por los ordenamientos nacionales para los delitos graves. Así pues, en el Estatuto de Roma, aplicable tan solo a los Estados partes, se establece que nada de lo dispuesto en su parte VII se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en dicha parte;

d) La pena capital se ha caracterizado a menudo como una cuestión de derechos humanos en el contexto del derecho a la vida de las personas condenadas. Sin embargo, es ante todo una cuestión que atañe al sistema de justicia penal y un importante elemento disuasorio en el contexto de los delitos más graves; por su parte, los derechos de la persona acusada o condenada se garantizan mediante el debido proceso, incluidas las disposiciones de apelación, examen y revisión y otras garantías judiciales. Por consiguiente, la pena de muerte debe examinarse desde un punto de vista mucho más amplio y sopesarse en relación con los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a vivir en paz y seguridad;

e) Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social, cultural, jurídico y de justicia penal, a salvo de cualquier injerencia de otros Estados. Además, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y concretamente el Artículo 2, párrafo 7, establecen claramente que ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. En consecuencia, el mantenimiento o abolición de la pena de muerte y los tipos de delitos a los que se aplica dicha pena son cuestiones que deben ser definidas por cada Estado, teniendo plenamente en cuenta los sentimientos de su propio pueblo, la situación de la delincuencia y la política penal. A este respecto, resulta improcedente intentar adoptar decisiones universales sobre esta cuestión, imponer a los Estados Miembros medidas que competen a su jurisdicción interna o intentar modificar, por medio de una resolución de la Asamblea General, normas del derecho internacional que se establecieron tras un amplio proceso de negociación;

f) Algunos Estados Miembros han decidido voluntariamente abolir la pena de muerte, y otros han optado por imponer una moratoria a las ejecuciones. Por su parte, muchos otros Estados Miembros siguen manteniendo la pena de muerte en su legislación. Todos los Estados Miembros actúan de conformidad con sus obligaciones internacionales. Cada Estado miembro ha decidido libremente, de acuerdo con su propio derecho soberano establecido en la Carta de las Naciones Unidas, una vía determinada en función de sus propias necesidades sociales, culturales y jurídicas a fin de mantener la seguridad social, el orden y la paz. Ningún Estado Miembro tiene derecho a imponer su posición a los demás.

Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de los Estados Miembros que se enumeran a continuación tienen a bien solicitar al Secretario General que haga distribuir la presente nota verbal como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 72 b) del programa.

1. Arabia Saudita
2. Bahrein
3. Bangladesh

4. Botswana
 5. Brunei Darussalam
 6. China
 7. Egipto
 8. Emiratos Árabes Unidos
 9. Irán (República Islámica del)
 10. Iraq
 11. Jamaica
 12. Kuwait
 13. Libia
 14. Maldivas
 15. Nigeria
 16. Omán
 17. Pakistán
 18. Papua Nueva Guinea
 19. Qatar
 20. República Árabe Siria
 21. República Popular Democrática de Corea
 22. Saint Kitts y Nevis
 23. Santa Lucía
 24. Singapur
 25. Sudán
 26. Yemen
 27. Zimbabwe
-